



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso: Ordinario Laboral
Radicación: 05001-31-05-019-2017-00341-01
Demandante: Jorge Armando Quiñonez Ortiz
Demandado: Empresas Públicas de Medellín ESP, Constructora
Concreto S.A., Coninsa Ramón H. S.A.,
Construcciones e Comercio Camargo Correa S.A. sucursal
Colombia, las cuales conforman el Consorcio CCC
Ituango
Llamada en garantía: Chubb Seguros Colombia S.A.
Asunto: Consulta
Procedencia: Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente: Sandra María Rojas Manrique
Temas: Reajuste prestaciones sociales y aportes a la seguridad
social, horas recreativas u horas de capacitación,
prestaciones extralegales, descansos compensatorios y
sanciones moratorias

Medellín, junio diecisiete (17) de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, a decidir el grado jurisdiccional de consulta en favor del demandante, respecto

de la sentencia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, el 9 de marzo del 2022, en el proceso ordinario laboral de primera instancia, instaurado por el señor JORGE ARMANDO QUIÑONEZ ORTÍZ en contra de EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP, CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A., CONINSA RAMÓN H. S.A., CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL COLOMBIA, las cuales conforman el CONSORCIO CCC ITUANGO, proceso al cual fue vinculado como LLAMADO EN GARANTÍA CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A., Radicado 05001-31-05-019-2017-00341-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

JORGE ARMANDO QUIÑONEZ ORTÍZ instauró demanda ordinaria laboral en contra de EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP, CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A., CONINSA RAMÓN H. S.A., CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL COLOMBIA, las cuales conforman el CONSORCIO CCC ITUANGO, pretendiendo se declare que entre el actor, las integrantes del Consorcio CCC Ituango y Empresas Públicas de Medellín ESP, en calidad de beneficiaria del servicio, existió un contrato de trabajo escrito a término fijo, desde el 30 de mayo del 2013 hasta el 31 de agosto del 2016; se declare que de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, Empresas Públicas de Medellín ESP era beneficiaria de las funciones que realizada el accionante; se condene a las demandadas, de manera conjunta, solidaria o separadamente al pago de la reliquidación de las cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicio y vacaciones por todo el tiempo laborado; sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, por el no pago de las prestaciones sociales; horas recreativas o dos horas semanales de capacitación; prima de zona roja; prima de calor; primas de campo; bono de ambiente; sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990; descansos

compensatorios; reajuste de los pagos a los riesgos de invalidez, vejez y muerte e indexación.

Los supuestos fácticos que apoyan las anteriores pretensiones, se sintetizan en que Empresas Públicas de Medellín ESP contrató los servicios del Consorcio CCC Ituango para la ejecución de la obra Hidroeléctrica Ituango, explicando que el Consorcio CCC Ituango se encuentra conformado por las empresas Constructora Conconcreto S.A., Coninsa Ramón H S.A. y Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A. Sucursal Colombia, vinculándose el actor laboralmente al referido Consorcio, por medio de un contrato de trabajo escrito a término fijo, desde el 30 de mayo del 2013 hasta el 31 de agosto del 2016, en el cargo de Encargado 2 categoría, afirmando que laboraba en un horario asignado directamente por el Consorcio CCC Ituango, que era por turnos, habiendo sido trabajador interno en la obra, laborando horas extras, domingos y festivos, sin descansos, teniendo como último salario básico \$2.393.000, más horas extras, domingos y festivos.

Aseveró que el 31 de agosto del 2016 renunció voluntariamente a su cargo, procediendo las accionadas, a liquidarle las prestaciones sociales, sin tener en cuenta los recargos nocturnos, horas extras, días festivos y dominicales, ello aunado al hecho que nunca le pagaron los descansos compensatorios a los cuales tenía derecho, por estar interno en la obra.

Indicó que el Consorcio CCC Ituango nunca le dio al demandante las dos horas semanales de capacitación o recreación, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 50 de 1990. Resalta que tanto Empresas Públicas de Medellín ESP como el Consorcio CCC Ituango, tienen trabajadores en las mismas condiciones que el actor, a los que le reconocieron prestaciones extralegales, tales como primas de zona roja, prima de calor, primas de campo y bono de ambiente.

Expresa que, pese a que el Consorcio CCC Ituango consignó las cesantías del demandante en un fondo de cesantías, no lo hizo conforme al salario real devengado por el mismo, lo mismo ocurrió con los aportes a la seguridad social, por lo que el 15 de diciembre del 2016 presentó a Empresas Públicas de Medellín ESP, reclamación solicitando las acreencias adeudadas, sin accederse a lo pretendido, resaltando que, Empresas Públicas de Medellín ESP, era la encargada de vigilar y controlar el desarrollo de la obra así como que se cumpliera con el contrato celebrado con el Consorcio CCC Ituango, cumpliendo el actor funciones propias de un trabajador oficial.

Finaliza indicando que Empresas Públicas de Medellín ESP fue beneficiaria del servicio que prestaba el reclamante y que los servicios prestados por el mismo, fueron para beneficiar a dicha empresa, por ser la dueña de la obra Hidroeléctrica Ituango.

1.2.- CONTESTACIÓN

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP, dio respuesta a la demanda, indicando que es cierto que contrató los servicios del Consorcio CCC Ituango, aclarando que en aquel momento fungió en representación de la sociedad EPM Ituango, según contrato CT-2011000001 hoy contrato CT-2012-000036, relacionado con la construcción de la presa central y obras asociadas al proyecto hidroeléctrico Ituango, contrato que fue cedido por EPM Ituango a EPM.

Adujo que EPM no fue empleador del accionante, ya que éste se vinculó laboralmente al servicio de Consorcio CCC Ituango, aclarando que, según lo señalado por interventoría de la obra, el contrato suscrito por el actor y el Consorcio, fue adicionado y modificado en varias oportunidades, mutando finalmente a un contrato determinado por el avance de la obra, siendo por obra contratada, asegura que no es cierto que EPM reconozca las prestaciones

extralegales que se enuncian en la demanda, por cuanto las mismas no se encuentran consagradas en la ley, ni en los acuerdos convencionales existentes. Agrega que no es cierto que el accionante realizara funciones de un trabajador oficial, por cuanto en la planta de cargos de la entidad, no existe en cargo de Encargado 2 categoría.

A su vez, propuso las excepciones de inexistencia de solidaridad legal al tratarse de contratos de construcciones de obras civiles que no tienen absolutamente nada que ver con las actividades normales de EPM ESP; falta de legitimación en la causa por pasiva con respecto a EPM ESP; inexistencia sustancial del derecho; prescripción; pago; buena fe; inexistencia total de la obligación; falta de causa y carencia de acción.

Por su parte, **CONSTRUCCIONES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A., CONSTRUCTORA CONCRETO S.A. y CONINSA RAMÓN H S.A.**, como integrantes del **CONSORCIO CCC ITUANGO**, dieron respuesta al libelo petitorio, indicando que la función del actor era Encargado de 1 categoría; su jornada era de las 6 a las 18 horas o de las 18 a las 6 horas, con una hora de descanso para el almuerzo o la merienda. Explicaron que cuando inició el contrato, el turno era de 12 días de trabajo por 2 de descanso, a partir del 25 de enero de 2016 y hasta el 31 de agosto del 2016 que renunció, laboró en el turno 14*7, es decir, 14 días de trabajo por 7 de descanso, de los cuales 2 de esos días corresponden al compensatorio de los dominicales laborados, 3 días en los que el Consorcio asume el pago, pero el trabajador permanece en la casa y queda el sábado y domingo que hacen parte de su descanso normal, siendo claro que si tenía descanso, reconociendo que laboró horas extras, dominicales y festivos, los cuales le fueron cancelados, liquidándose las prestaciones sociales, teniendo en cuenta su salario promedio.

Explicaron que para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 21 de la Ley 50 de 1990, reglamentado por el Decreto reglamentario 1127 de 1991 y sin tener la necesidad de parar la obra por 2 horas cada semana, buscando que los

8000 trabajadores tengan diferentes actividades, se diseñaron diferentes programas encaminados a la recreación, cultura, deporte y capacitación, que se van desarrollando a lo largo de cada año, logrando así la integración de todos sus trabajadores, los cuales cuentan con la plena libertad de asistir.

Y en su defensa formuló las excepciones de inexistencia de la obligación; pago y prescripción.

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP formuló **LLAMAMIENTO EN GARANTÍA** a CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A., argumentando que la contratante exigió al Consorcio contratista, la suscripción de pólizas de seguros ante un eventual incumplimiento de ésta en el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones de sus trabajadores, tomando el Consorcio la póliza No. 43134305 en el contrato CT-2012-000036 en donde se ampara el riesgo por salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, relacionados con la construcción de la presa, central y obras asociadas, explicando que EPM asumió todos los derechos y obligaciones derivados del contrato antes referido, de acuerdo con la cesión del contrato BOOMT, razón por la cual el beneficiario de la póliza desde el 2013 es EPM.

La sociedad llamada en garantía, CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A., se opuso tanto a las pretensiones de la demanda, como a las pretensiones del llamamiento en garantía, formulando como excepciones, respecto de este último, las de coberturas otorgadas por la póliza se encuentran circunscritas a lo estrictamente convenido en su clausulado, la aseguradora responde hasta la suma máxima asegurada, la póliza no cubre el dolo y la culpa grave del asegurado.

Finalmente, CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. **LLAMÓ EN GARANTÍA** a CONSTRUCCIONES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A., CONSTRUCTORA CONCRETO S.A. y CONINSA RAMÓN H

S.A., llamamiento aceptado por el Despacho, sin embargo, una vez notificadas las personas jurídicas llamadas en garantía no dieron respuesta al mismo.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO

Mediante fallo proferido el 9 de marzo del 2022, el juzgado de conocimiento declaró que entre el actor y el Consorcio CCC Ituango, compuesto por las sociedades Coninsa Ramón H S.A., Constructora Conconcreto S.A. y Camargo Correa Infra Construcoes S.A. sucursal Colombia, como empleador, existió un contrato de trabajo que finalizó con el cumplimiento de las obligaciones laborales; absolvió a las demandadas, de las pretensiones incoadas en su contra por el actor; declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación; exoneró de responsabilidad a Chubb Seguros Colombia S.A. y a las sociedades Coninsa Ramón H S.A., Constructora Conconcreto S.A. y Camargo Correa Infra Construcoes S.A. sucursal Colombia como integrantes del Consorcio CCC Ituango, en calidad de llamadas en garantía, condenando en costas al actor.

La parte demandante no presentó recurso de apelación, enviándose el proceso en el grado jurisdiccional de consulta.

1.4.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos, se pronunció el apoderado de la llamada en garantía Chubb Seguros Colombia S.A., solicitando se tenga como un indicio en contra de la parte actora, el que no hubiere presentado recurso de apelación, pese a que tenía la posibilidad de hacerlo, agregando que, en el hipotético caso de revocarse la providencia, se analicen las excepciones formuladas frente al llamamiento en garantía.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Procede la consulta, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que dispone “*Las sentencias de primera instancia, cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario serán necesariamente consultadas con el respectivo Tribunal si no fueren apeladas.*”

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

- Que Empresas Públicas de Medellín ESP y el Consorcio CCC Ituango, suscribieron el contrato CT-2012-000036, cuyo objeto fue la construcción de la presa, central y obras asociadas del proyecto hidroeléctrico Ituango, fechado el 9 de noviembre del 2012 –ver documento obrante en el expediente digital *01Expediente digitalizado.pdf folios 549 a 556* del plenario-.
- Que entre el demandante y el Consorcio CCC Ituango se celebró un contrato a término fijo inferior a un año, para la obra proyecto Hidroeléctrico Ituango, pactándose un salario de \$2.190.000, en el cargo de Encargado 2 Categoría, cuya fecha de inicio lo fue el 30 de mayo hasta el 26 de septiembre del 2013, tal y como se desprende del documento obrante en el expediente digital *01Expediente digitalizado.pdf folios 210 a 212* del plenario.
- Que el 22 de septiembre del 2014, se adicionó el contrato del actor, ampliándolo hasta el 21 de septiembre del 2015 –ver documento obrante en el expediente digital *01Expediente digitalizado.pdf folio 650* del plenario-.

- Que el 21 de septiembre del 2015 se suscribió cláusula modificatoria al contrato, en la cual se indicó que las partes convinieron modificar la modalidad del contrato de trabajo, para cambiarlo a contrato bajo la modalidad de contrato a porcentaje de obra a partir del 22 de septiembre del 2015 –ver documento obrante en el expediente digital *01Expediente digitalizado.pdf folio 652* del plenario-.
- Que el 30 de abril del 2016, se adicionó el porcentaje de obra, indicándose que, a partir de la mencionada fecha, se ampliaba hasta el 55% de avance de construcción de las obras proyecto hidroeléctrico Ituango –ver documento obrante en el expediente digital *01Expediente digitalizado.pdf folio 653* del plenario-.
- Que el 30 de agosto del 2016, el actor presentó renuncia a su trabajo, la cual fue aceptada ese mismo día –ver documento obrante en el expediente digital *01Expediente digitalizado.pdf folios 216 y 654* del plenario-.

2.3.- PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER

Debe determinar la Sala:

¿Si es procedente revocar la sentencia de primera instancia, para en su lugar condenar a las demandadas, a reliquidar las prestaciones sociales reconocidas al actor, así como los aportes a los riesgos de invalidez, vejez y muerte, realizados a favor del mismo, teniendo en cuenta para ello, el tiempo que laboró en dominicales, festivos y trabajo suplementario?

¿Si es viable reconocer las sanciones moratorias establecidas en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y en la Ley 50 de 1990?

¿Si procede el reconocimiento de horas recreativas o dos horas semanales de capacitación, prima de zona roja, prima de calor, primas de campo, bono de ambiente y descansos compensatorios?

2.4.- TESIS

Los problemas jurídicos se resuelven bajo la tesis según la cual (i) el Consorcio CCC Ituango, liquidó las prestaciones sociales al actor, teniendo en cuenta todos los conceptos salariales devengados por el mismo, ii) Los aportes a los riesgos de invalidez, vejez y muerte, se realizaron con un IBC que, igualmente, incluyó todos los conceptos percibidos por el actor, iii) no tiene derecho el reclamante, a las horas recreativas o dos horas semanales de capacitación pretendidas, por cuanto se acreditó que la demandada cumplió con este deber legal, en vigencia del contrato v) no hay lugar a reconocer la prima de zona roja, prima de calor, primas de campo y bono de ambiente, por cuanto no probó el interesado la fuente normativa que consagra el derecho v) no hay lugar a condenar a la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por cuanto las cesantías 2013, 2014, 2015 fueron consignadas en un Fondo especializado, entregándose directamente al trabajador las del 2016, causadas a la terminación del vínculo, tal y como lo autoriza la Ley 50 de 1990 vi) no procede condena a la sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, al no adeudarse al actor concepto alguno; en consecuencia debe CONFIRMARSE la sentencia.

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

La Constitución Política de 1991 erige al trabajo como un valor fundante del Estado, es así como en el artículo 25 lo define como un derecho y una obligación social que goza en todas sus formas de la especial protección estatal.

A su vez el trabajo subordinado debe ser garantizado en condiciones dignas y justas, con fundamento en los principios generales de igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, estabilidad en el empleo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, facultad de transigir sobre derechos inciertos, principio de favorabilidad al trabajador en caso de duda sobre la aplicación o interpretación de las fuentes formales de derecho, primacía de la realidad sobre las formalidades, garantía a la seguridad social, capacitación y descanso necesario. (artículo 53 Carta Constitucional).

En este contexto el Código sustantivo de Trabajo en el artículo 57 establece como obligación del empleador pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos y asimismo el legislador consagró en el referido estatuto otros derechos y prestaciones de carácter social a favor del trabajador dependiente y a cargo del patrono, entre los que se cuentan las vacaciones remuneradas, artículo 189, el auxilio de cesantía, artículo 249 y las primas de servicios, artículo 206. En adición a ellos el artículo 1 Ley 52 de 1975 establece el reconocimiento de los intereses a las cesantías.

Este conjunto de derechos salariales, prestaciones sociales, vacaciones y aportes al sistema de seguridad social integral, son considerados como derechos ciertos e indiscutibles y por ende son irrenunciables para el trabajador.

Es en virtud de la aplicación de los citados principios constitucionales y legales que se caracteriza el derecho laboral como derecho tuitivo y protector de los derechos de los trabajadores, sin que ello signifique que al ejercer la acción judicial se releve al colaborador de las cargas probatorias.

Los artículos 164 y 167 del Código General del Proceso, consagran las reglas probatorias de necesidad y carga de la prueba, así:

“Artículo 164. Necesidad de la prueba. “Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho”

“Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.

Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código.

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”

2.6.- CASO CONCRETO

Reliquidación cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicio y vacaciones por todo el tiempo laborado

Se adujo en los hechos de la demanda que al liquidarse las prestaciones sociales del actor, no se tuvo en cuenta los valores que el mismo devengó por concepto de recargos nocturnos, horas extras y trabajo en días festivos y dominicales.

Al plenario fueron aportadas certificaciones expedidas por el área de gestión humana del Consorcio CCC Ituango, la primera fechada el 15 de mayo del 2014, por medio de la cual se indicó que el demandante, labora al servicio del Consorcio CCC Ituango, desde el 30 de mayo del 2013, vinculado mediante contrato a término fijo, desempeñándose como Encargado 2 Categoría, con una asignación básica mensual de \$2.288.000 más horas extras; igualmente certificaciones del 28 de mayo, 3 de septiembre y el 24 de noviembre del 2015, en el mismo sentido, variando solo el salario para fijarlo en \$2.393.000 más horas extras. Y finalmente, se aportó certificación del 31 de agosto del 2016, en la que se indicó que el cargo desempeñado por el actor fue el de Encargado 1 Categoría, con una asignación básica mensual de \$2.743.000 más horas extras –ver documento obrante en el expediente digital *01Expediente digitalizado.pdf folios 218 a 222* del plenario-.

Asimismo, obra la liquidación definitiva de prestaciones sociales realizada al accionante –ver documento obrante en el expediente digital *01Expediente digitalizado.pdf folio 657* del plenario-, en la cual se indicó un salario de \$2.743.000, sin embargo, se evidencia que las prestaciones sociales fueron liquidadas sobre un salario superior al básico indicado.

Para zanjar la discusión propuesta en el proceso se procedió por la Sala a extraer de cada una de las colillas aportadas, los conceptos devengados por el actor en cada quincena y que correspondían al sueldo básico, recargos nocturnos, horas extras diurnas, horas extras nocturnas, horas extras diurnas festivas, horas extras nocturnas festivas, dominicales laborados ocasionalmente, dominicales laborados habitualmente y compensatorios, a efectos de determinar si los mismos fueron tenidos en cuenta, al momento de liquidarle sus prestaciones sociales, precisando que no fueron aportadas las planillas de todos los periodos.

MES	2013 Folios 259 a 266	2014 Folios 239, 242 a 243, 267 a 274	2015 Folios 237, 241, 243 a 252	2016 Folios 236, 241, 253 a 259
Enero		\$1.580.626	\$2.413.294	\$4.761.806
Febrero		\$1.620.667	\$3.545.425	\$4.350.962
Marzo		\$4.028.597	\$4.289.313	\$5.054.753
Abril		\$2.496.453	\$3.392.912	\$4.010.039
Mayo		\$3.639.874	\$159.533	\$4.898.675
Junio	\$3.733.330	\$3.843.677	\$2.061.494	\$4.129.876
Julio	\$3.801.021	\$3.617.993	\$3.749.926	\$5.116.642
Agosto	\$4.029.601	\$3.693.066	\$3.693.456	\$2.743.542
Septiembre	\$3.640.420	\$3.544.094	\$3.681.402	
Octubre	\$3.748.096	\$3.627.630	\$3.787.626	
Noviembre	\$3.758.132	\$4.101.725	\$2.227.164	
Diciembre	\$3.825.465	\$3.829.276	\$3.011.626	
PROMEDIO	\$3.790.866	\$3.301.973	\$3.001.097	\$4.383.286

De donde se obtiene los siguientes salarios promedio:

- Año 2013: \$3.790.866
- Año 2014: \$3.301.973
- Año 2015: \$3.001.097
- Año 2016: \$4.383.286

Ahora, en cuanto a las prestaciones sociales, se debe tener en cuenta que en este caso operó la prescripción de manera parcial, respecto de los conceptos causados con anterioridad al 15 de diciembre del 2013, excepto en lo relacionado con las cesantías, cuyo término de prescripción debe contabilizarse a partir de la terminación del vínculo.

De manera que contrastadas las acreencias laborales que debieron ser reconocidas al actor y las que fueron cancelada, se obtiene lo siguiente:

CESANTÍAS

Año	Reconocidas	Causadas
2013	\$2.221.201	\$2.221.180
2014	\$3.791.252	\$3.301.973
2015	\$3.556.581	\$3.001.097
2016	\$3.172.033	\$2.022.191

En este caso, es evidente que fueron superiores los valores reconocidos por la demandada, respecto de los que le corresponderían al reclamante, no existiendo faltantes que den lugar al reajuste pretendido.

Ahora, en lo atinente a los intereses a las cesantías, primas de servicios y vacaciones, aunque no se evidencia la totalidad de los pagos por los diferentes meses de cada anualidad, en tanto, se reitera no obran todos los comprobantes de pago, la liquidación arroja los siguientes valores:

Prestaciones	Reconocidos	Causadas
Intereses a las cesantías	\$1.162.079	\$1.001.251
Primas de servicios	\$11.121.578	\$9.383.214
Vacaciones	\$5.389.718	\$4.690.973

Así las cosas, es palmario que los guarismos reconocidos por la accionada superan las cifras liquidadas por esta colegiatura, debiendo recordarse que correspondía al demandante la carga probatoria de acreditar las diferencias en las cuales funda la solicitud de reliquidación, de donde se concluye que, de acuerdo con la prueba aportada al proceso; las prestaciones sociales y las vacaciones fueron liquidadas teniendo en cuenta el tiempo laborado en trabajo suplementario.

Prima de zona roja, prima de calor, primas de campo y bono de ambiente

No es diáfana la parte actora en su escrito petitorio, al solicitar el pago de estos conceptos, ya que no explica cuál es la fuente normativa de la obligación, la forma en la que se liquidan estas prestaciones extralegales ni quienes tendría derecho a recibirlas.

Sobre este punto, se tiene como el señor Gilberto de Jesús Cano Duarte, testigo de la parte actora, reconoció que habían trabajadores de mandos altos que recibían otras prestaciones, como lo eran las primas de campo, las cuales eran para los ingenieros y personal administrativo, lo cual fue reiterado por el señor Walberto Mosquera Arboleda, testigo de la parte demandada, cuando afirma que la prima de campo se reconoce al personal administrativo que no genera horas extras y que son de manejo y confianza, siendo para personal administrativo como es el caso de los ingenieros y contadores, agregando que, frente a los Encargados categoría 1 y 2, no se consagraba la prima de campo, porque ese cargo es operativo y genera las horas extras.

Sobre las demás prestaciones no existen ningún medio de prueba, de tal modo que el accionante no cumplió con su carga probatoria. En este escenario no es dable efectuar condena respecto a las prestaciones extralegales reclamadas por la parte actora.

De las sanciones moratorias- sanción moratoria del artículo 65 C.S.T y el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Debe tenerse presente que al no existir condena alguna a cargo de las demandadas, no se cumple con los presupuestos consagrados en el citado artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo para que se cause la indemnización moratoria.

Ahora, en cuanto a la pretensión de la sanción del numeral 3° del artículo 99 de la ley 50 de 1990, por la no consignación de las cesantías, se tiene que las mismas fueron consignadas para los años 2013 a 2015, siendo entregadas

directamente al demandante las correspondientes al tiempo trabajado en el año 2016, las cuales se incluyeron al momento de efectuar la liquidación definitiva por terminación del contrato, lo que se encuentra acorde al artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por cuanto el empleador no está obligado a consignar las cesantías e intereses a las mismas a un fondo destinado para ello, porque el contrato no se encontraba vigente para el 15 de febrero del 2017. Por lo tanto, es igualmente improcedente condenar a la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías en un fondo.

Horas recreativas o dos horas semanales de capacitación

El artículo 21 de la Ley 50 de 1990 preceptúa:

“En las empresas con más de cincuenta (50) trabajadores que laboren cuarenta y ocho (48) horas a la semana, éstos tendrán derecho a que dos (2) horas de dicha jornada, por cuenta del empleador, se dediquen exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación”.

Con la respuesta a la demanda se anexó comprobante de asistencia del actor al programa de formación de líderes ambientales, con una duración de 12 horas – ver folio 764-, formación de encargados de obras a cielo abierto con una duración de 200 horas –ver folio 765-, curso de interpretación de planos de obras viales con una duración de 40 horas –folio 770-, así como planillas de asistencia a las formaciones encargados e interpretación de planos viales, de lo que se concluye que el Consorcio CCC Ituango no fue ajeno a su obligación de capacitación para a sus trabajadores.

Aunado a lo anterior y como de manera correcta lo indicó el a quo, esta obligación del empleador es aplicable durante la vigencia de la relación laboral, la que en este caso finiquitó, no siendo viable efectuar un reconocimiento económico de carácter compensatorio en caso de incumplimiento, porque el legislador no previó tal sanción.

Descansos compensatorios

Respecto de los descansos compensatorios, el actor no indica cuales compensatorios no le fueron reconocidos y el tiempo suplementario que produce su causación, apareciendo en los comprobantes de pago aportados con la respuesta a la demanda, el reconocimiento de los mismos, por lo que tampoco existe medio de convicción que respalden la pretensión.

Debe recordarse que “*para que el juez produzca condena por horas extras, dominicales o festivos las comprobaciones sobre el trabajo más allá de la jornada ordinaria, han de analizarse de tal manera que en el ánimo del juzgador no quede duda alguna acerca de su ocurrencia, es decir, que la prueba sobre la que recae, tiene que ser de una definitiva claridad y precisión, que no le permita al juzgador hacer cálculos o suposiciones acomodaticias para determinar el número probable de las que se estimen trabajadas.* (CSJ SL38382, 25 mayo 2010 y SL 2164 del 2020)

Reajuste de los aportes pensionales

Revisados cada uno de los comprobantes de pago aportados al plenario por la parte actora –documentos obrante en el expediente digital *01Expediente digitalizado.pdf folios 237 a 276* del plenario-, así como las planillas de autoliquidación de aportes anexos –documentos glosados en el expediente digital *01Expediente digitalizado.pdf folios 778 a 794* del plenario-, a efectos de establecer si lo devengado por el actor, coincide con los IBC reportados para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, advirtiéndose que respecto a los meses de enero y febrero del 2014, mayo y junio del 2015, así como agosto del 2016, solo se aportó el comprobante de una quincena, concluyéndose que existe solo diferencia en los IBC de los meses de junio y diciembre del 2013, junio y diciembre del 2014, diciembre del 2015, enero, junio y agosto del 2016.

Frente a lo anterior, se encontró que tal diferencia se explica porque en esos periodos, el demandante percibió algunos conceptos adicionales, no salariales, como primas de servicios, incentivo sin base, vacaciones, intereses a las cesantías y bonificación de productividad, los que no podían ser tenidos en cuenta para la base de la cotización.

Así las cosas, no hay lugar a efectuar condena por el reajuste de los aportes realizados a los riesgos de invalidez, vejez y muerte.

En consecuencia, se CONFIRMARÁ la decisión de primer grado. Sin costas en esta instancia, atendiendo al grado jurisdiccional de Consulta en el que se conoce.

3.- DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1.- Se **CONFIRMA** la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, el 9 de marzo del 2022, en el proceso ordinario instaurado por el señor JORGE ARMANDO QUIÑONEZ ORTÍZ en contra de EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP, CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A., CONINSA RAMÓN H. S.A., CONSTRUCCIONES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL COLOMBIA, las cuales conforman el CONSORCIO CCC ITUANGO, proceso al cual fue vinculado como LLAMADO EN GARANTÍA CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.

2.- Sin costas en esta instancia.

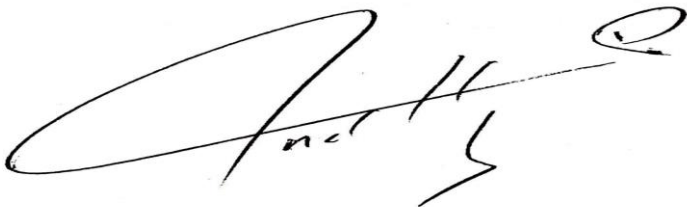
3.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,



SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE



JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO